de las lecciones dictadas .....

Asumir la tragedia que vivimos con toda su crudeza es paso ineludible para adentrarnos en el verdadero significado de la realidad. Solo así, podremos superar la manera arbitraria de pensar en "héroes o chivos expiatorios" para justificar desmanes y contradicciones. Solo así, podremos extraer las lecciones que nos dejan las vidas truncadas, las traiciones expresadas y la evidencia de una sociedad enferma de pasiones y verticalmente dividida. Solo así, podremos conjurar los riesgos de la destrucción mutua, de autoritarismos que pretenden convertir opciones políticas en ley colectiva, excluyendo a todo aquel que se interponga en dichos objetivos. Solo así, podremos abrirnos a los cambios necesarios sin recurrir a la insubordinación o a la confrontación.

Oportunidad para aprender

Todavía es corto el tiempo transcurrido para desmarcar las emociones y delinear la visión de conjunto que exigen los hechos. Abundan las anécdotas, explicaciones, posicionamientos, y protagonismos. Hay intereses y motivaciones que impiden el esclarecimiento exhaustivo de los hechos. Es imposible desvincular la tragedia de los antecedentes de creciente conflictividad social de nuestra sociedad. Tampoco es posible desconocer los intereses humanos en juego dispuestos a influir en los resultados de las investigaciones que la sociedad demanda. Es difícil aceptar que solo la "verdad nos hará libres". Separemos lo anecdótico de lo trascendente.

La experiencia nos señala que las revoluciones suelen ser atajos contradictorios en la historia de los pueblos. La gradualidad de los cambios son propios de la naturaleza humana. La semilla necesita no sólo germinar, sino madurar. Arrancar la cizaña rápidamente tiene el riesgo de llevarse por delante la semilla, y también el proyecto de vida. Hay una lección dictada por la tragedia que tenemos que aprender: las imposiciones y los atajos son antagónicos a la maduración y la convivencia humana de las sociedades.

Venezuela busca un proyecto de convivencia incluyente. Queda claro que ningún extremismo puede enfrentar la complejidad de la realidad. Ni los intentos autoritarios, ni el egoísmo excluyente que sólo quiere el poder. Pretender reducir los hechos a una confrontación entre oficialismo y oposición, es olvidar que diversos sectores sociales han sido activos actores de resistencia a la imposición autoritaria, al manejo discrecional y sumiso de los poderes públicos, a la irresponsabilidad e ineficacia de las instancias de gobierno, a la confiscación de la participación organizada. Es una mayoría cuya disconformidad demuestra una voluntad de encontrar los cauces democráticos, los elementos de confianza para afirmar los objetivos esenciales de la convivencia cotidiana.

Es la mayoría que rechaza justificaciones coyunturales bajo la amenaza de confrontación sangrienta. Es aquella que rechaza seguir justificando el 4 de febrero de 1992 mediante argumentos que pueden sustentar cualquier cosa. Rechaza los golpes de fuerza porque está clara que ellos son camino para el incremento de la barbarie. Pero también rechaza la "racionalidad revolucionaria" aplicada a los problemas cotidianos cuyas consecuencias son la desatención e incremento de las necesidades vitales y la confiscación de un futuro con oportunidades para amplios sectores de venezolanos. Saldar el trauma social existente es asumir un proyecto incluyente de la diversidad de nuestra realidad.

Ha quedado claro que en nuestro régimen de libertades tenemos una justicia sometida al poder político que no responde a las demandas de la vida ciudadana y es camino certero para la impunidad y la violencia. Apelamos a las argucias del poder porque no confiamos en la confrontación de los hechos ni en la sanción de responsabilidades. El escepticismo tiene su alimento en la impunidad. A pesar de las decisiones firmes de organismos dependientes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos no se ha logrado que las instancias domésticas castiguen a los responsables de las víctimas del 27 de febrero de 1989. Hay impunidad ante los desmanes de los grupos parapoliciales que operan al menos en siete estados de la República. Y lo mismo podemos decir de las desapariciones forzadas de la tragedia de Vargas en 1999. No hay razones para confiar en la justicia. El único que puede ocuparse de esta fatídica impunidad es el Estado, el cual sometido al imperativo constitucional tiene que construir instituciones independientes y responsables ante la ciudadanía.

Los hechos exigen una "Comisión de la Verdad". La Asamblea Nacional instancia representativa de la diversidad política aprobó su creación el 25 de Abril. Sin embargo, de inmediato surgieron las divergencias en cuanto a su autonomía y el alcance de sus objetivos. Las ONG que deberían ser postuladas para integrarla se abstienen de hacerlo ante la carencia de una ley que garantice su independencia. No quieren ser tontos útiles y menos aun cómplices de una tragedia. El Foro por la Vida hace una propuesta y presenta un anteproyecto de ley, puesto que la sociedad organizada no se desentiende de la cruda realidad, es un problema de todos. Hay una lección dictada que tenemos que aprender: no es posible hacerle el juego a la impunidad ya que estamos pagando un precio muy alto en vidas humanas al dejar la justicia sometida al poder político.

¿Y qué decir del Poder Ciudadano? Su legitimación es un imperativo. Su designación no puede seguir respondiendo a la "transitoriedad" La carencia de dicha legitimación aumenta la desconfianza en su independencia y justifica las arbitrariedades de quien detenta el poder. Se requiere sancionar la Ley de Postulaciones para todos los poderes públicos de acuerdo al nuevo marco constitucional, si se quiere realmente encontrar cauces institucionales de convivencia democrática.

Hacia metas compartidas

Los hechos señalan la ausencia de canales para el entendimiento de la diversidad. La política es el arte de coordinar las diferencias de manera tal que los conflictos evolucionen hacia metas compartidas. Si la sociedad venezolana fuera homogénea no habría necesidad de esos canales. Pero como toda sociedad es heterogénea, exige negociaciones, y acuerdos con personas. En este sentido, hay que entender que los acuerdos conllevan negociaciones con todos los involucrados los que me gustan y los que no me gustan, hay que conversar tanto con el enemigo como el adversario, porque el objetivo es mantener la cohesión del colectivo. La política humaniza la adversidad. Esto nos lleva a recordar la ley mora que planteaba la política como la búsqueda del máximo de bien posible y la aceptación del mínimo mal inevitable. No es posible evitar la existencia del mal, pero si lo es domarlo. Y por ello las democracias se renuevan constantemente en el equilibrio y autonomía de los poderes y en las exigencias de organizaciones políticas que respondan a sus ciudadanos.

La tragedia ha evidenciado el vacío de interlocutores y operadores políticos. Las movilizaciones ciudadanas requieren cauces para la acción política. Las organizaciones políticas son los mecanismos que facilitan la ejecutoria política coherente y continua. Las frustraciones de los partidos políticos por no haber cumplido con su papel en el pasado, implica que ahora deben asumir tanto su renovación, como la fundación de nuevas organizaciones para que actúen como correas transmisoras entre los diferentes conflictos y proyectos de la sociedad. Sin partidos no hay democracia porque sencillamente no hay diálogo entre la ciudadanía y el Estado. El respeto a las minorías, fundamental para la inclusión social, sólo es posible con la representatividad que debe facilitar la organización de la sociedad.

¿Dónde estamos?

La gran mayoría de los venezolanos quiere construir caminos. Tanto la confrontación, como los extremismos, son atajos que llevan a callejones sin salida. No acepta restauraciones, ni saltos atrás. Es una meta compartida el compromiso de la verdad, el debate, y por ende el diálogo transparente con agenda precisa sobre los problemas fundamentales que permita el encuentro con lo esencial para nuestra convivencia: instituciones autónomas y confiables, compromiso de inclusión social mediante la inversión y creación de riqueza que garantice empleo y continuidad de las iniciativas de bienestar descentralizadas, y el fortalecimiento del quehacer democrático, tanto en los estilos de gobierno, como en la resolución de conflictos. Es la responsabilidad que nos toca asumir, es la exigencia de las vidas humanas truncadas, es la esperanza y la aspiración de paz que todos buscamos.